

Inmigrante paquistaní muere en una prisión norteamericana

13 November 2001

Utilice esta versión para imprimir | Envíe esta conexión por el email | Email el autor

La muerte de un inmigrante paquistaní, prisionero en una cárcel norteamericana, revela las violaciones a las libertades civiles que sufren cientos de ciudadanos extranjeros detenidos sin derecho a ningún recurso legal luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Mohammed Rafiq Butt, de 55 años, murió el 23 de Octubre por aparentes fallas cardíacas en su celda de la institución correccional de Kearne, en el condado de Hudson, Nueva Jersey. En este lugar hay alrededor de 280 inmigrantes detenidos. Un compañero de celda encontró el cuerpo cara abajo en un camastro. Las autoridades no dieron noticia del deceso sino hasta el día después.

El inmigrante paquistaní fue tomado en custodia en una redada policial en contra de cientos de árabes, musulmanes y otros inmigrantes después de los secuestros de aviones y los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono. Butt, quien trabajaba en un restaurant y vivía en Queens, Nueva York, fue acusado de estar en los Estados Unidos por un tiempo mayor al permitido por su visa, lo que es considerado una falta menor.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que Butt no tenía conocimiento de ninguna información con respecto a los ataques del 11 de septiembre y había accedido voluntariamente a ser deportado. Un portavoz del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) dijo que Butt estaba detenido en espera de que las autoridades paquistaníes emitieran un pasaporte válido. Por su parte, personal del Consulado de Paquistán dicen que nunca fueron informados del arresto de Butt ni se les había solicitado ningún tipo de documentos de viaje.

Miembros del departamento de inmigración no explicaron el por qué Butt llevaba en custodia mas de

un mes, si había accedido a ser deportado a Paquistán. El sobrino de Butt dijo por su parte que su tío nunca se quejó de algún problema de salud antes de su arresto.

Personal paquistaní declaró que Butt nunca intentó contactarlos. Guardias de la prisión le dijeron a miembros del consulado que Butt había declarado que sufría de una enfermedad de tipo genética y que estaba siendo tratado con antibióticos. Si Butt hubiese contactado al consulado, personal paquistaní habría, como es regular, notificado a sus familiares y arreglado asistencia legal. De hecho, en muchos casos inmigrantes en la misma situación que Butt antes de los atentados del 11 de septiembre eran liberados mientras esperaban por su deportación.

El gobierno se niega a entregar información acerca de detenidos en redadas antiterroristas y han hecho difícil para los encarcelados el obtener ayuda legal.

De acuerdo a un artículo en el Los Angeles Times, “Jueces niegan fianzas, cancelan audiencias y cierran sumarios. Fiscales se niegan a divulgar que está ocurriendo tras las puertas cerradas de las cárceles y cortes de justicia. Abogados defensores a menudo no saben que les sucede a sus clientes o se rehusan a discutirlo con ellos.”

“Autoridades federales incluso se niegan a dar a conocer el número de personas en custodia”.

Abogados reclaman por un creciente mal trato de los detenidos. Un hombre de origen Saudita, representante de ventas, detenido por cargos menores en contra de leyes de inmigración, fue encadenado de piernas cuando recibió a su familia en la cárcel. Se le negó bebida e incluso un colchón o manta.

Hay informes de ataques físicos y otros abusos en contra de quienes son detenidos en custodia. En Mississippi, un estudiante de intercambio paquistaní de 20 años dijo que fue desnudado y golpeado por otros prisioneros cuando fue ingresado por guardias a la

celda. Luego que se le negó atención médica, dijo.

“Creo que es totalmente deprimente y triste”, dijo Jeanne Butterfield, jefe de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en Washington. “Sólo reafirma nuestra creencia de que debe haber más apertura. Hemos estado pidiendo información acerca de quien esta detenido y si tienen acceso a ayuda legal. Pero no puedo obtener nada”.

Nancy Chang, jefe del Centro sobre Derechos Constitucionales en Nueva York, dijo que sus intentos para obtener información han chocado contra una pared de piedra. “Es un poco extraordinario”, dijo, comentando que estas órdenes “mordaza” emitidas por jueces no tienen precedente alguno en sus capacidades.



To contact the WSWS and the
Socialist Equality Party visit:

wsws.org/contact